

COLOMBIA: LA PAZ INCIERTA

Por: Cristina de la Torre

En Colombia, la del 15 de junio no será una simple elección de Presidente; en ella se juega el país su suerte para las décadas venideras. Y no sólo la paz. También la democracia, el Estado de derecho y la posibilidad de avanzar en el posconflicto hacia una sociedad más justa y moderna. Se juega el modelo de país. Al extremo, el momento decide si sigue la guerra y se vuelve al régimen autoritario que el entonces presidente Uribe presidió durante ocho años, o se silencian los fusiles y se les abre una oportunidad a reformas largamente represadas, por cuya ausencia ocupa Colombia el segundo lugar del mundo en desigualdad.

Más que incompatibilidad de caracteres –frecuente en matrimonios mal avenidos-, la radical polarización que ha proyectado esta campaña entre Santos y Uribe desnuda una fractura de las élites que podrá proyectarse a la sociedad toda y desestabilizar la democracia. Esta ruptura evoca la puja, a medias resuelta después por el Frente Nacional, entre el reformismo liberal de los años 30 y un conservadurismo a ultranza que bebía en la fuente del fascismo. Evoca también su desenlace en guerra civil, cuando a las reformas liberales de López Pumarejo –agraria y tributaria, separación de Iglesia y Estado, educación laica, promoción del sindicalismo- respondió la derecha con el período aciago de la Violencia, una guerra civil que arrojó 280.000 muertos. Quedó el cambio en suspenso.

Si hoy no hay acuerdo en torno al derecho supremo de la paz, esta rotura en la cumbre podrá erosionar el sistema político y fraccionar a la nación en polos irreconciliables. No sorprendería que la lid de medio siglo entre Estado e insurgencia derivara en enfrentamiento entre hermanos. Primer indicio: el uribismo anunciaba, en la antesala de los comicios, que si perdía la elección, la impugnaba; y si la ganaba, celebraba el resultado. Un paso más en la peligrosa ruta de deslegitimación creciente de las instituciones que ha

recorrido el jefe de aquel movimiento extremista. Un temperamento adicto al golpe de mano, que florece silvestre en esta Colombia que pasa por modelo de democracia en América.

Lunar del continente, fue el nuestro casi el único país donde se ahogó en sangre la revolución liberal de la primera mitad del siglo XX. Casi el único donde no hubo reforma agraria. El único exento de los golpes militares que menudearon en la región, pero no de la violencia oficial que ha decuplicado los muertos habidos en aquellos regímenes de fuerza. El único donde el narcoparamilitarismo ocupó la tercera parte de las sillas del Congreso y fue bancada del Gobierno anterior. El único donde el Cardenal Primado designó por oficio y repetidas veces al Presidente de la República, de filiación conservadora; donde el actual Procurador General de la Nación despacha más con la Biblia que con los códigos y, blandiendo crucifijos contra el aborto, frustra la creación de una clínica de la mujer en Medellín; donde la ministra de Educación de Uribe introduce de nuevo la cátedra obligatoria de religión en los colegios públicos. Colombia, único país del hemisferio donde respiran aún guerrillas marxistas, anacronismo de Guerra Fría que armoniza con su recíproco de la otra orilla que perora todavía contra el comunismo, si bien lleva éste un cuarto de siglo sepultado bajo las piedras del muro de Berlín.

De orangutanes, sacoleva y cocaína

Factores que hace 80 años bifurcaron la política colombiana sobreviven en este país, a menudo acentuados. El escritor Francisco Gutiérrez ¹ califica a Colombia de anomalía donde conviven represión abrazadora y democracia: un orangután con sacoleva, escribe. Mientras las instituciones políticas garantizan separación de poderes, control constitucional y elecciones periódicas, la estructura de la sociedad quedó anclada en un pasado oscuro y violento. Hay aquí democracia en las reglas de juego del régimen político,

¹ Gutiérrez, Francisco, "El orangután con sacoleva". IEPRI, Universidad Nacional y Penguin Random House, Bogotá, 2014

mas no en el orden social y económico. Porque las elites privatizaron la seguridad y la justicia para imponer a sangre y fuego sus derechos sobre la propiedad de la tierra; derechos tan ambiguos como arbitrario e inequitativo ha resultado el disfrute de la tierra. La iglesia Católica, su aliada, articuló el discurso del más rudo conservadurismo. Hoy renace éste en Uribe, con la misma impronta de guerra santa que ahora se cohesiona en odio ciego contra el enemigo único y supremo de la patria: la guerrilla.

Reprimida la llamada revolución liberal, ahora parecen reanimarse elementos de aquella bifurcación ideológica de la política tradicional entre liberalismo y conservadurismo. Y van cristalizando, aún en los acuerdos de La Habana, de inconfundible sello liberal. El Gobierno de Santos suscribe acuerdos para dar al campesino tierras recuperadas de la ilegalidad, y fortalece su economía modernizándola, articulándola a los mercados. Amplía la democracia, la inscribe en un modelo de integración territorial, y aspira a romper el vínculo entre política y armas. Promoverá sustitución masiva de cultivos ilícitos – mayormente apadrinados por las Farc- por planes integrales de desarrollo rural y, en decisión histórica, revisará el enfoque de la lucha antinarcóticos. Pero, ambivalente, porfía al tiempo en otros frentes con el modelo neoliberal. Se embarca en restitución de tierras al campesinado expropiado por la fuerza, mientras prohija la apropiación ilegal de baldíos para la gran empresa agroindustrial.

También neoliberal, cabalga Uribe por su parte sobre las rigideces de una transición represada por talanqueras oxidadas que conviven con la economía de mercado. Hace honor al maestro, Laureano Gómez, conspicuo promotor de la Violencia, la espada en una mano, en la otra, la cruz. A la manera de Francisco Franco, cuyo seguidor ferviente se proclamaba Gómez a grandes voces. A la manera del *hacker* espía de la paz, confeso “sediento de sangre” contratado por el candidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, para conspirar contra el proceso de La Habana.

Además de encarnar la ideología de marras –y de ponerla en práctica-, funge Uribe como mentor de la nueva Colombia que ha emergido al calor del

narcotráfico. El fenómeno se erige en protagonista de la crisis y potente motor de la guerra. El narcotráfico lo trastorna todo, en un país sembrado en la inequidad y donde el viraje hacia el modelo de apertura económica sólo ha beneficiado a importadores y banqueros. Ahonda los desajustes de la sociedad pues su dinámica es, como se sabe, la del mercado negro: arroja montañas de lucro y de violencia. Pero se ofrece a la vez como vehículo efficientísimo de movilidad social en un país que carga con un pesado lastre oligárquico. La producción y comercialización de drogas ilícitas ha irrigado dinero acá y allá, sin olvidar a sectores que emergen de la pobreza y la exclusión. Complementa bien al clientelismo –nuestro modelo republicano– como canal de ascenso de nuevas elites políticas.

Sin embargo, la suya es una dinámica profundamente conservadora. Porque trafica con la muerte, se amanceba con los poderes regionales más retardatarios, coopta sus valores autoritarios y lidera una contra-reforma agraria a sangre y fuego. En el conflicto armado, han obrado sus ejércitos como fuerza paramilitar, a menudo aliada del Ejército. Y en el corazón de la contienda, la tierra. Bandera de cuna de las Farc, esta guerrilla terminó, no obstante, mancillándola, en su disputa con mafias de la droga por el control del territorio y de la población, indispensable en la logística del negocio. Que lo fue para financiar su guerra, sí, pero cada vez lo es más como fuente de lucro particular. Absorbidas por esta práctica y por los réditos del secuestro, sacrificaron las Farc parte sustancial de su ideología política en el altar de una guerra degradada que trocó al pueblo raso en su víctima inerte.

Uribismo: poder formal y poder real

No hay muchas razones para el optimismo. Con independencia del agraciado en la elección, se verá la paz en calzas prietas. Si triunfa Zuluaga, el candidato formal de la derecha extrema porque el real es Uribe, probablemente se clausure el proceso de paz que ha logrado acuerdos jamás vistos en medio siglo: se le impondrían condiciones equivalentes a una rendición, de modo que se disolviera la mesa de diálogo y siguiera la guerra su marcha. Se

recompondrían las bancadas parlamentarias en favor del uribismo, por minoritaria que sea la suya propia. En un país de presidencia imperial, el Congreso colombiano es gobiernista. Y se reprimiría al movimiento popular que ha renacido, el agrario en particular, en cuyas manos quedaría la bandera del cambio, agitada también por una izquierda minoritaria. Aunque ganara Santos, artífice de este proceso de paz, quedaría el uribismo tan fortalecido tras su resurgimiento electoral, que afectara las conversaciones de La Habana y dificultara, en veces hasta la obstrucción, las reformas de posconflicto. Quedarían éstas confiadas a la capacidad de lucha y de organización de los movimientos sociales. Incógnita. Y a las de la izquierda para unirse y crear con ellos un Frente Amplio. Incógnita aún mayor.

Uribe, caudillo populista que vino a llenar el vacío de partidos y propuestas de país acudiendo al “Estado de opinión”, recurso de autócratas, hará valer su popularidad. Popularidad bien ganada, entre otras razones, por su sensibilidad para interpretar y generalizar la antipatía hacia las Farc, el Enemigo Malo; por haberlas golpeado en ejercicio de su llamada seguridad democrática. Con su enorme capacidad desestabilizadora del sistema político, hará cuanto pueda para frustrar la paz y sus reformas, horadándolas desde dos frentes: el de la presión de opinión pública, en primer lugar. Y, segundo, desde un trabajo de hormiga enderezado a sumarse fuerzas parlamentarias, que hallaría terreno abonado en la fragilidad de la Unidad Nacional, la coalición mayoritaria del Gobierno. Congresistas de la U, el conservatismo, Cambio Radical y el viejo Pin que fueron suyos podrían volver al redil y lograr mayoría en decisiones legislativas cruciales, frente a la otra orilla ocupada por el liberalismo, la izquierda y parte de la Unidad Nacional. Si bien la ley de bancadas prohíbe el transfuguismo político y dificultaría esos deslizamientos.

Si Santos es reelegido, los diálogos de La Habana tendrán que buscar un consenso entre elites, salvar la fractura que se ha abierto entre ellas, para darle al proceso viabilidad jurídica y política. Tal vez una carta de negociación

del uribismo fuera la convocatoria de una asamblea constituyente que abriera las puertas a la reelección indefinida del ex presidente. O a un sistema parlamentario que lo erigiera en Primer Ministro, también indefinidamente. Aspiración del otro extremo entre los actores de la guerra con el que sería preciso transar también, si se aspira a conjurar todo factor de violencia política. Sería la segunda fase inevitable de la tarea cumplida en La Habana con las Farc: negociar con la ultraderecha representada en el uribismo duro, modulando sus propuestas, como se moduló la propuesta agraria de las Farc. Se habría encarado así a los dos extremos del conflicto armado y eliminado sus cabos sueltos.

Pero no sería fácil aquella negociación. Porque la paz le sustrae a la derecha el espacio político del que goza hoy. Sostiene Marta Ruiz¹ que una apertura democrática perjudica a Uribe, porque la palanca de su poder es el miedo. Con una desmovilización de las Farc, pierde aquel su caballito de batalla: sin Farc, no hay Uribe; sin guerra, Uribe se desmorona. También pierde si se desmonta el narcotráfico: desaparece la mitad de su fuerza política, los parapolíticos. Pierde con una comisión de la verdad, porque queda todo su prontuario en evidencia. Pierde con la reforma rural pactada en La Habana porque ella afectaría a sus amigos del campo: al terrateniente improductivo, al hombre de ganadería extensiva, al notablato rural que no concibe darle tierra al campesino ni el surgimiento de una clase media en el campo. Uribe encarna el modelo de tierra sin campesinos y campesinos sin tierra.

La tenaza que se cierra contra la paz apunta, sobre todo, a los cambios que ella le traería al campo, y que las fuerzas más oscuras no querrán aceptar. Porque sería golpear el vetusto poder de los señores de la tierra... y de la guerra. Negociar con ellos se impone, si no se quieren otros 220 mil muertos.

Congreso viscoso, paz incierta

El nuevo haz de contradicciones no se adscribe a un formato de personalidad partidista porque nuestras colectividades tradicionales son amalgama inconsistente de intereses creados, a duras penas de ideas y programas. Pero la presión del proceso de paz y de las alternativas de cambio que se plantean fuerzan, para bien de la democracia, definiciones ideológicas, hoy reagrupadas en dos bloques políticos así: uno, abarca desde el centro-derecha (Unidad Nacional) hasta la izquierda democrática (Polo Democrático, Alianza Verde y Progresistas); en el otro se instala la derecha (ultraderecha uribista) y una tendencia conservadora moderada y modernizante.

Mentor del primero, Santos reencarna el republicanismo liberal edificado sobre el clientelismo. Se aplica a la paz, reivindica a las víctimas del conflicto, inicia un proceso de restitución de tierras arrebatadas al campesinado, normaliza relaciones entre los poderes públicos y con los países de la región. Pero descuida los derechos sociales y su modelo económico desafía los fines de equidad e inclusión de una paz democrática. Sus tratados de libre comercio desindustrializan y arruinan las posibilidades del desarrollo, y su reforma tributaria es grosero tributo a los ricos. Santos es aleación de reformismo modernizante y neoliberalismo.

Uribe es versión posmoderna del viejo caudillismo latinoamericano, en clave populista y de culto al poder personal. Con la extrema derecha europea comparte el sentimiento nacionalista e inscribe su discurso en disyuntivas inapelables entre Dios, patria y guerra, por un lado, y comunismo terrorista por el otro. Encarna la alianza de terratenientes y poderes económicos del notablato regional; y la nueva sociedad surgida del narco-paramilitarismo, con el que cogobernó durante ocho años. En esta contienda electoral, Santos retuvo a la clase política, pero no a la opinión, que tornó en buena medida al discurso desafiante y reaccionario de Uribe.

Al nuevo Congreso, escenario privilegiado de encuentro de estas fuerzas políticas, se le ha llamado “constituyente”, pues tendrá en sus manos las reglas y decisiones legislativas del posconflicto. Para comenzar, en desarrollo rural, distribución y legalización de la tierra, protección y modernización de la

economía campesina. En política, ampliar la democracia, ponerla a la mano de la gente en los territorios; expedir, por fin, un estatuto de oposición y una reforma electoral que asegure los derechos de las minorías. En justicia, garantizar acceso de todos al sistema judicial, revisar el sistema de elección de las Altas Cortes, de Procurador, Contralor y Fiscal General. Reforma radical en salud y educación como derechos inalienables del ciudadano. Y, la piedra de toque, reglamentar el marco jurídico para la paz, que contempla modulación de penas por delitos conexos al político y puertas abiertas a la participación de las guerrillas en política.

Para Antonio Sanguino, concejal de Bogotá, en el nuevo congreso se ve el proceso de paz seriamente comprometido. Aunque Santos podría liderar las reformas rural, política, de víctimas y Derechos Humanos; logró él ratificar su mayoría parlamentaria con 60 por ciento de los escaños contra 20 del uribismo y tres minorías (Polo, Pin y Verdes), mas no toda ella suscribirá su promesa de paz.

Difícil el intento de reasignación de tierras al campesinado cuando a la vieja mentalidad señorial se han sumado nuevos contingentes de terratenientes venidos del narcotráfico. Cuando la tierra no sólo da estatus social, sino que es riqueza y medio de reproducción del poder político. Este estamento estuvo siempre sobrerrepresentado en el parlamento colombiano, y lo domina. Los mismos Guerra Tulena que malograron la reforma agraria de López Pumarejo y Carlos Lleras, los mismos que hace cuarenta años derrotaron a sangre y fuego al movimiento campesino reunido en Anuc son mayoría en el poder legislativo y bastión del uribismo.

El problema de la tierra, apunta Sanguino, mutó a parapolítica, reforzó la mentalidad colonial y cambió el paisaje del territorio. 32 de los antiguos parapolíticos ligados a la contrarreforma agraria, al despojo violento de cuatro millones de hectáreas, fueron reelegidos en los comicios parlamentarios de marzo pasado. La ultraderecha uribista seguirá compactándolos, ahora en férrea oposición a cualquier intento de reforma. Otros le conceden a un hipotético gobierno de Santos margen de maniobra

significativo, vistos los instrumentos del poder institucional y el cerrado apoyo de la comunidad internacional al proceso de paz. Pero mucho parece indicar que el futuro de las reformas se cifrará en las posibilidades de negociación con la ultraderecha y en la capacidad de presión del movimiento popular.

Igual incertidumbre rodea a una posible reforma del régimen político. Con un congreso semejante, el margen de maniobra para transformar las reglas del juego electoral y expedir un estatuto de oposición quedará constreñido por el clientelismo tradicional. Éste se allanará, con mucho, a conceder un puñado de curules a las Farc desmovilizadas. En derechos humanos, se daría trato simétrico de justicia transicional a todos los actores de la guerra: a guerrilleros, paramilitares y miembros de la Fuerza Pública, incursos en crímenes asociados al conflicto armado. Un buen punto de partida, si la ultraderecha le marchara a una propuesta de negociación.

Con todo, la formación de la coalición mayoritaria en el Congreso dependerá de quién resulte elegido Presidente. Están en juego los bloques de gobierno y oposición, de cara a las reformas de posconflicto. Buena nueva para la democracia colombiana, cuyos partidos tendrán que empezar a redefinirse en función de ideas y programas, no ya apenas por componenda con el Ejecutivo. Buena nueva para la democracia colombiana si, además, se reorganizan como colectividades sólidas, cubriendo la gama entera de las ideologías. Todo lo cual no garantiza las reformas, claro. Pero sí a lo menos el debate.

El movimiento social

Se adivina en Santos el hálito de la frustrada revolución liberal, aunque en difícil convivencia con el modelo neoliberal, que Uribe comparte. La discrepancia parece habitar en los móviles tradicionales de una contienda que el Frente Nacional sólo resolvió como pacto entre elites pero no logró reformas sociales de fondo. Cuando Carlos Lleras intentó, entre otras, la

reforma agraria, la derecha liberal-conservadora la aplastó, como aplastó al movimiento campesino que no se quería ya sirviente de los ricos sino propietario de tierra. Después se remataría con el Consenso de Washington, para sumir aún más a las mayorías en la desesperanza.

Los partidos tradicionales no encarnan hoy en forma unívoca este conflicto ideológico. Pero pesa, de un lado, la carga de reformas emboladas; del otro, el lastre de un notablato violento que se apropió la justicia y la función represiva del Estado para hacerse a la brava con la tierra, mientras se ufana de su Estado liberal. Dos Colombias, que aprendieron a convivir y se retroalimentan.

La izquierda, por su parte, apenas matiza este cuadro hegemónico por el centro-derecha y la ultraderecha. Víctima del culto a la personalidad, dogmática y presa de compulsión a devorarse a sí misma, esta fuerza se ha visto, además, acosada desde los flancos extremos del espectro político: desde los poderes del establecimiento que, cuando no coopta a sus líderes, los persigue y hasta produce genocidios como el de la Unión Patriótica. Y las guerrillas, con su táctica de combinación de formas de lucha legal y armada, crearon el pretexto providencial para que la reacción estigmatizara a la izquierda democrática y se ensañaran sus ejércitos en ella. Para que el uribato viera en todo líder sindical o librepensador un “guerrillero vestido de civil”, expresión originaria del líder paramilitar Carlos Castaño. Azaroso señalamiento en un país sembrado de patriotas listos a disparar en nombre de Dios contra el hereje. En previsión de un triunfo de Zuluaga el 15 de junio, andan ya preparando su arsenal: el ejército anti restitución de tierras de Urabá acaba de anunciar una nueva ofensiva, no bien se posea su nuevo presidente.

En la era de la democracia refrendaria y extraparlamentaria, la pulsión de cambio se desahoga hoy en Colombia en el movimiento social que renace disperso, apenas organizado, pero masivo. Como lo dice el último estudio de Cinep, según el cual en 2013 se registraron 1027 protestas populares. Despertar de la sociedad acaso catapultado también por iniciativas de este

Gobierno impensables en el pasado, como la ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Y la iniciativa histórica de la paz. Fírmese acuerdo en La Habana, o no, ya el proceso surtido parece haber despertado un anhelo invencible de reformas. Y no son los partidos sus mentores, cada vez más disociados del común: de campesinos, estudiantes, pequeños mineros, lugareños, ciudadanos maltratados en los hospitales por un sistema que convirtió en negocio la salud.

Que la reforma rural tomaría cuerpo aunque no prosperaran las negociaciones de paz lo sugiere el acuerdo suscrito con la Cumbre Agraria, que agrupa a 13 organizaciones campesinas. La reconoce el Gobierno como interlocutor válido, para negociar un pliego único en mesa única. Un miembro de la Cumbre Agraria vaticina que, en cualquier caso, “aparecerán actores empoderados con los que se tendrá que discutir el reparto del poder en lo social, en lo político, en lo agrario. Un escenario de interlocución sobre problemas que antes se solucionaban a tiros”. El movimiento social, aunque precariamente organizado todavía, presionará por reformas en el campo. Pero a la vez, su eficacia potencial dependerá de la capacidad para organizarse y, sobre todo, de que termine el conflicto armado.

Si el uribismo vuelve al poder en Colombia se malogra la paz, peligra todo el andamiaje institucional de la democracia y la construcción de un nuevo país será la roca de Sísifo. A las puertas de la elección final, no podrá la izquierda anteponerle a la paz arrogancias rudimentarias de oposición blanco-o-negro. Porque ella es derecho supremo de todos los colombianos y prevalece sobre cualquier interés de partido. Y si hoy se personifica en Juan Manuel Santos, no podrá menos que respaldarlo en las urnas. La extraordinaria votación que obtuvo Clara López obedeció, sin duda, a la distancia colosal que tomó ella frente al discurso de la izquierda ortodoxa. De donde cabría esperar que proyectara la misma sensatez al trance que vive la paz. Sería, por lo demás, un principio de unidad de la izquierda, hacia la formación de un Frente ampliado al movimiento popular y a otras fuerzas democráticas. La paz sería,

pues, el elemento nucleador de una nueva izquierda que se la jugara con eficacia por la edificación de un país más equitativo e incluyente.

ⁱ Ruiz, Mata, Revista Semana.com. Bogotá, mayo 20/14